



Fuego amigo: el caos de la oposición venezolana

Informe sobre América Latina N°71 | 23 de noviembre de 2018

Traducido del inglés

Headquarters

International Crisis Group

Avenue Louise 149 • 1050 Brussels, Belgium

Tel: +32 2 502 90 38 • Fax: +32 2 502 50 38

brussels@crisisgroup.org

Preventing War. Shaping Peace.

Tabla de contenidos

Resumen ejecutivo	i
I. Introducción	1
II. Todo se desmorona.....	3
A. La desintegración de la MUD	3
B. Persecución por parte del gobierno	5
C. La legislatura que no puede legislar	6
D. Luchas internas en la oposición.....	8
E. El Frente Amplio: hacia una alianza opositora más amplia.....	9
F. Unidad “subóptima”	10
III. Resistencia pacífica vs. violenta	11
IV. Divisiones en la oposición y la perspectiva de unas negociaciones	14
V. Participación internacional	16
VI. Conclusión	19
ANEXOS	
A. Partidos y alianzas de la oposición.....	22
B. Acerca de International Crisis Group.....	24
C. Informes Crisis Group sobre América Latina desde 2015	25
D. Junta directiva de Crisis Group.....	26

Conclusiones principales

¿Qué hay de nuevo? La oposición venezolana está dividida en facciones aparentemente irreconciliables que no se ponen de acuerdo sobre la estrategia a seguir para acabar con la crisis de su país. Discrepan sobre si deberían participar en las elecciones y cuándo hacerlo, sobre si deberían negociar con el gobierno, y sobre si deberían apoyar la posible intervención militar planteada implícitamente por potencias extranjeras.

¿Por qué importa? Sin unidad entre al menos las principales facciones opositoras, las perspectivas de resolver la crisis son escasas, ya que esto exige negociaciones genuinas entre la oposición y el gobierno y probablemente algún tipo de autoridad transicional que incluya elementos de ambos. De lo contrario, es probable que haya nuevos actos de violencia – ya sea enfrentamientos civiles o incluso acción militar.

¿Qué se debería hacer? Las facciones opositoras comprometidas con una solución negociada deberían dejar a un lado sus diferencias y forjar una estrategia y un liderazgo común. Los actores externos deberían apoyar la unidad de la oposición y evitar alimentar las divisiones insistiendo en que se celebren negociaciones sin que se den las condiciones adecuadas o sugiriendo que la intervención militar – que podría ser enormemente destructiva – es una opción viable.

Resumen ejecutivo

La implosión social y económica de Venezuela ha provocado una migración sin precedentes que encabeza la lista de preocupaciones en América Latina. Los países vecinos y otras potencias extranjeras han tomado medidas – incluidas sanciones – para lograr algún tipo de transición negociada, que sigue siendo el mejor camino para salir de la crisis. Pero la presión externa hasta ahora no ha logrado superar la intransigencia del gobierno. Mientras, la escisión de la oposición interna – así como la neutralización de líderes clave mediante el encarcelamiento, el exilio y la inhabilitación para cargos a los que fueron electos – menoscaba la estrategia de presión y reduce aún más las perspectivas de diálogo. Aquellos miembros de la oposición que estén comprometidos con una transición pacífica y negociada deben unirse para apoyar una estrategia coherente que se articule con la de sus aliados internacionales, o se arriesgan a ser meros espectadores de las crecientes amenazas de acción militar externa para derrocar al gobierno, lo que probablemente tendría consecuencias catastróficas si se llevara a cabo.

El éxodo en masa de venezolanos es consecuencia de la hiperinflación, la escasez crónica de productos básicos, la disminución de las oportunidades de empleo y el colapso de la infraestructura – incluido un servicio de salud que ya no puede tratar las enfermedades más comunes, mucho menos frenar epidemias. La magnitud del mal gobierno del país y la urgencia de la difícil situación de su gente ha llevado a algunas figuras de la oposición y líderes extranjeros a sugerir que solo el uso de la fuerza puede asegurar el cambio. Estas personas ven a los miembros de la oposición que están en contra de la intervención militar como un obstáculo. Al mismo tiempo, los intentos esporádicos de provocar una insurrección armada han proporcionado al presidente Nicolás Maduro un pretexto para intensificar la persecución de sus críticos, lo que amenaza con agudizar la hostilidad entre las partes y marginar a los restantes partidarios de las negociaciones con el gobierno entre las filas opositoras.

Las divisiones cada vez más evidentes entre la oposición no son principalmente ideológicas. Si bien las fuerzas opositoras abarcan desde la extrema izquierda hasta la derecha conservadora, sus diferencias en torno a la estrategia trascienden estas categorías. Tres de los cuatro miembros originales del grupo directivo de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el llamado G4, pertenecen a la Internacional Socialista, por ejemplo, pero esa afinidad común no ha impedido la ruptura de la alianza.

De hecho, muchos partidos están internamente divididos en torno a las tácticas. Los líderes de los partidos por lo general eligen aquella estrategia que parezca ofrecer la mejor oportunidad de obtener ventajas para ellos mismos o para el partido, forjando alianzas por el mismo motivo. Las soluciones electorales a la crisis típicamente son respaldadas por quienes cuentan con el mejor aparato electoral, por ejemplo. Un supuesto historial de traición a menudo dificulta las negociaciones a favor de la unidad. Las redes sociales proporcionan el medio idóneo para desprestigiar a quienes opinan diferente, en particular acusándolos de colaborar con el gobierno. Esto último fomenta los insultos y el uso de las negociaciones y elecciones para sem-

brar el disenso en las filas opositoras, así como manipular las redes sociales mediante el uso de la desinformación y los “bots”.

La desunión no solo se interpone a una estrategia común opositora. Además, complica los esfuerzos para poner fin a la crisis de Venezuela. Por ahora, las negociaciones sobre una transición parecen improbables, dada la intransigencia del propio gobierno. De hecho, unas nuevas negociaciones podrían ser contraproducentes sin un claro compromiso de Maduro de que se tratarán de reformas genuinas y conllevarán medidas de fomento de la confianza, que podrían incluir la liberación de presos políticos, la relajación de la persecución de figuras de la oposición y la restauración de la autoridad de la Asamblea Nacional. A falta de esto, las negociaciones corren el riesgo de permitir al gobierno parecer conciliador y calmar la ira pública sin hacer concesiones sustanciales, fomentando así una mayor división entre las facciones opositoras.

Pero incluso si el gobierno estuviera dispuesto a negociar de buena fe, sin una oposición unida carece de un interlocutor creíble. Asimismo, la desunión de la oposición imposibilitaría la formación de un futuro gobierno de transición que goce de un amplio apoyo público y político, incluya elementos chavistas y opositores, y sea lo suficientemente estable para pasar la página a la crisis. Dicho gobierno – probablemente la única salida a la actual situación de Venezuela – enfrentará enormes desafíos, entre ellos reactivar la economía, reconstruir la infraestructura, frenar el delito violento y tal vez incluso reprimir la resistencia armada del ala dura de los chavistas.

Superar las actuales divisiones dentro de la oposición, o al menos de aquellas facciones dentro del país que apoyan una transición negociada, es por lo tanto fundamental. La prioridad es elegir un nuevo liderazgo capaz de forjar una nueva estrategia. La oposición podría hacer esto o bien celebrando elecciones primarias o bien convocando a los principales líderes opositores del país a acordar un equipo para liderar la transición que incluya a tecnócratas con evidente probidad y experiencia y sea capaz de inspirar confianza a nivel nacional e internacional.

Por su parte, los actores internacionales deberían apoyar los esfuerzos para unir a la oposición, o al menos evitar las medidas que pudieran dividirla aún más. Deberían presionar para que se implementen las condiciones necesarias para unas negociaciones creíbles con el gobierno, siguiendo las pautas planteadas anteriormente. La UE ha sugerido establecer un grupo de contacto formado por Estados latinoamericanos y de otras regiones que apoyen una solución pacífica a la crisis; por ahora, esta idea ofrece el mejor mecanismo para aumentar la presión internacional sobre el gobierno de Maduro para que negocie de buena fe. Los actores internacionales también deberían dejar de hablar de intervención militar, ya que al alentar a las facciones opositoras a endurecer su enfoque desalientan su unidad. Asimismo, cualquier intervención militar externa casi seguro sería desastrosa, y más que ayudar a poner fin a la crisis probablemente generaría aún más caos y sufrimiento para los venezolanos. En líneas generales, un plan de transición factible requiere más que simplemente destituir a Maduro. Requiere determinar cómo, por quién y según qué reglas será gobernado el país de ahí en adelante.

Caracas/Bogotá/Bruselas, 23 de noviembre de 2018

Fuego amigo: el caos de la oposición venezolana

I. Introducción

En diciembre de 2015, tras casi dieciséis años de gobierno, primero bajo el fallecido Hugo Chávez y desde 2013 bajo su sucesor Nicolás Maduro, la oposición venezolana unida logró una aplastante victoria en las elecciones legislativas. La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), integrada por casi todos los partidos opositores, obtuvo dos terceras partes de los escaños en la Asamblea Nacional. El triunfo electoral reconcilió temporalmente a las dos alas rivales de la oposición, que se habían dividido en 2014 en torno a si se debía o no organizar manifestaciones para obligar a Maduro a renunciar¹. Pero en lugar de anunciar el fin de la era chavista, en retrospectiva la victoria parece haber sido un falso amanecer. Hoy, la MUD está hecha añicos, y su reconstrucción parece improbable². Y mientras la oposición continúa dominando el parlamento, el gobierno ha usado su control de otras ramas del Estado, en especial el Tribunal Supremo de Justicia, para bloquear todas las iniciativas de la Asamblea, despojarla de autoridad y privarla de recursos, incluidos los salarios y costes operativos, dejándola prácticamente impotente³.

Lo que es aún peor, la oposición se está desgarrando a sí misma: los líderes de las diferentes facciones a menudo parecen gastar más energía en denigrarse unos a otros que en censurar al gobierno o elaborar una estrategia para poner fin a la crisis y estabilizar una economía colapsada. Quienes están en el poder han explotado hábilmente las divisiones y las ambiciones personales de los líderes opositores en una exitosa estrategia de divide y vencerás. Los gobiernos extranjeros y organismos multilaterales que buscan una solución a la grave crisis política, económica y social del país a menudo se desesperan ante el estado de la oposición. Pero algunos, especialmente el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, han contribuido a avivar las disputas entre la oposición tomando partido en ellas⁴. Los

¹ El así llamado plan La Salida fue lanzado en febrero de 2014 por Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma y María Corina Machado de Vente Venezuela. No logró desplazar a Maduro y llevó al encarcelamiento de López y Ledezma (El primero permanece en arresto domiciliario; el último está en el exilio.) Machado tiene prohibido salir del país. Véase Informe Breve de Crisis Group sobre América Latina N°30, *Venezuela: punto de quiebre*, 24 de mayo de 2014. Para un diagrama de los partidos opositores de Venezuela, véase el Anexo A.

² Alonso Moleiro, “La alianza opositora venezolana certifica su fin”, *El País*, 24 de octubre de 2018.

³ Véase Informe Breve de Crisis Group sobre América Latina N°36, *Poder sin el pueblo: evitando el colapso de Venezuela*, 19 de junio de 2017.

⁴ A lo largo de los últimos dos años, Almagro se ha alineado repetidamente con el ala de la oposición que está en contra del diálogo. El 16 de octubre dijo que quienes participaban en las elecciones regionales eran un “instrumento esencial del...fraude”. Un mes después, al lado de Ledezma, dijo que había “sectores en la MUD que no representan a la oposición venezolana”. Ledezma, cuyo partido ocupa solo un escaño en el parlamento, está a favor de una “intervención humanitaria” por fuerzas externas. “Almagro cree que participación opositora en elecciones avaló el fraude”, *El Estí-*

aliados externos de la oposición también están en peligro de fragmentarse de forma similar⁵.

Este informe examina el atribulado estado de la oposición venezolana entre los juegos de poder del gobierno de Maduro y los persistentes rumores de intervención extranjera para destituir al gobierno y frenar el colapso socioeconómico del país. Además, evalúa las iniciativas – hasta ahora embrionarias – para volver a unir a la oposición en torno a un programa de cambio pacífico. Está basado en entrevistas realizadas en Venezuela con políticos opositores, analistas independientes, diplomáticos radicados en Caracas y otros.

mulo, 16 de octubre de 2017; “Almagro dice que hay sectores en la MUD que no representan a la oposición venezolana”, EFE, 28 de noviembre de 2017.

⁵Tras la negativa de Almagro a descartar una intervención militar, el Grupo de Lima – un organismo de catorce Estados miembros del hemisferio occidental formado en agosto de 2017 para buscar una solución a la crisis de Venezuela – emitió una declaración en la que expresaba su “rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o ... la amenaza o el uso de la fuerza”. Cuatro de los catorce miembros del grupo se negaron a firmar el comunicado, no obstante, supuestamente por motivos de procedimiento. “Declaración del Grupo de Lima: Comunicado Conjunto 016-18”, 15 de septiembre de 2018. Y mientras el presidente Iván Duque de Colombia ha descartado constantemente una intervención militar, su embajador en Washington dijo el 18 de septiembre que “todas las opciones deberían estar sobre la mesa”. Rodrigo Palau, “Iván Duque and Colombian ambassadors clash over intervention in Venezuela”, *Caracas Chronicles*, 27 de septiembre de 2018.

II. Todo se desmorona

Es un lugar común decir que la sociedad venezolana está polarizada. La crisis que ha consumido al país durante casi dos décadas ha sido protagonizada por dos fuerzas políticas aparentemente irreconciliables, el gobierno y la oposición, enzarzados en un conflicto permanente. Pero referirse a “la oposición” hoy en día plantea la pregunta: ¿qué oposición?

A. La desintegración de la MUD

La ruptura de la MUD, que en su día fue una alianza de más de doce partidos, es consecuencia del fracaso de la campaña de protestas callejeras que llevó adelante durante cuatro meses (abril-julio de 2017), cuyo objetivo fue obligar al gobierno a negociar la restauración de la democracia. Más de 160 personas murieron a consecuencia de la represión violenta de las protestas a manos de los escuadrones antidisturbios de la policía y la Guardia Nacional, en ocasiones acompañados por civiles armados que trabajaban para el gobierno, en ciudades por todo el país⁶.

En un intento de recobrar la iniciativa, el gobierno convocó comicios para elegir una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), supuestamente para reescribir la Constitución, pero la oposición boicoteó estas elecciones por considerar que habían sido fraudulentas e inconstitucionales. El 16 de julio de 2017 – dos semanas antes de las elecciones a la ANC – la oposición celebró su propio referéndum nacional, apoyado por la Asamblea Nacional pero rechazado por el gobierno, en el cual se invitaba a los votantes a rechazar la ANC, llamar a las fuerzas armadas y los funcionarios públicos a defender la Constitución de 1999 y apoyar las decisiones del parlamento, y finalmente aprobar el establecimiento de un mal definido “gobierno de unidad nacional” para “restaurar el orden constitucional”. Según la MUD, alrededor de 7,5 millones de personas (casi el 40 por ciento del electorado) participaron en el referéndum, de las cuales más del 99 por ciento votaron a favor de cada propuesta. Si bien es difícil determinar los números con precisión, claramente hubo una enorme participación, especialmente dado el carácter no oficial de la votación.

Sin embargo, el éxito del plebiscito fue breve. El gobierno siguió adelante con la elección de la ANC el 30 de julio. Posteriormente, y pese al hecho de que la participación en la votación de la oposición el 30 de julio pareció ser mayor que la participación en las elecciones de la ANC, las protestas callejeras quedaron en nada, y la oposición no logró ponerse de acuerdo sobre cómo aprovechar el apoyo de las masas. El 18 de septiembre el ala más radical de la MUD formó un nuevo movimiento, llamado Soy Venezuela, que exigía que la oposición se negara a reconocer el gobierno de Maduro y llamaba a la formación inmediata de un gobierno de unidad nacional. Los principales miembros del movimiento eran Vente Venezuela, liderado por la ex diputada María Corina Machado, y Alianza Bravo Pueblo, liderada por el exiliado ex alcalde

⁶ Véase Informe Breve de Crisis Group, *Poder sin el pueblo: evitando el colapso de Venezuela*, op. cit.; “Venezuela: 6,729 protestas y 163 fallecidos desde el 1 de abril de 2017”, Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, 2 de agosto de 2017. Las cifras oficiales del gobierno aluden a 129 muertes.

de Caracas, Antonio Ledezma. Cinco diputados alineados con Soy Venezuela formaron el grupo “16 de julio” para perseguir los objetivos del referéndum.

Pero fue la cuestión de si debían o no participar en futuras elecciones la que dividió más profundamente a la MUD y los partidos que la integraban. La autoridad electoral controlada por el gobierno había celebrado unos comicios para elegir a la Asamblea Constituyente que violaban los principios de una persona, un voto y la representación proporcional⁷. También parece haber inflado las cifras de participación, supuestamente en hasta un 100 por ciento⁸.

Cuando el gobierno anunció, tras una larga demora, que las elecciones a gobernadores estatales se celebrarían el 15 de octubre, la mayoría de los partidos de la MUD decidieron participar. Pero un gran número de votantes opositores decidieron no acudir a las urnas, y solo hubo cinco candidatos ganadores de la MUD. Cuatro de ellos eran de Acción Democrática, pero posteriormente su partido los expulsó por acceder a la demanda del gobierno de que juraran el cargo ante la ANC⁹. Por primera vez desde la introducción del actual sistema de votación electrónica en 2004, surgió evidencia física (en el estado de Bolívar, al suroeste del país), de que el gobierno había alterado las actas para modificar el resultado¹⁰.

El anuncio por parte del gobierno de unas elecciones presidenciales tempranas – adelantando a mayo una votación prevista para diciembre de 2018 – llevó a otra división debilitadora. El anuncio torpedeó las negociaciones entre el gobierno y la oposición en la República Dominicana, en las cuales la fecha de las futuras elecciones había sido objeto de acalorada disputa¹¹. No obstante, Henri Falcón, dirigente de Avanzada Progresista, decidió presentarse, desafiando el boicot de la MUD, y si bien en última instancia se negó a reconocer la victoria de Maduro, el daño ya estaba he-

⁷ La autoridad electoral otorgó un voto adicional a los miembros de ciertos grupos, incluidos los jubilados, los concejales comunitarios y los discapacitados, y la composición de la ANC sobrerrepresentaba ampliamente a las áreas rurales. Informe Breve de Crisis Group, *Poder sin el pueblo: evitando el colapso de Venezuela*, op. cit.

⁸ El gobierno de Maduro alegó que más de ocho millones de personas votaron en sus posteriores elecciones a la ANC, pero fuentes independientes sugieren que el total fue considerablemente inferior. Véase Informe de Crisis Group sobre América Latina N°65, *Cómo detener la onda expansiva de la crisis en Venezuela*, 21 de marzo de 2018; “Statement on the recent Constituent Assembly election in Venezuela”, Smartmatic, 2 de agosto de 2017; Girish Gupta, “Venezuelan vote data casts doubt on turnout at Sunday poll”, Reuters, 2 de agosto de 2017.

⁹ Juan Pablo Guanipa de Primero Justicia, gobernador electo del estado de Zulia, fue el único que se negó a jurar el cargo ante el CNE. La asamblea estatal controlada por el chavismo declaró las elecciones nulas; el CNE volvió a celebrarlas y declaró ganador a un candidato chavista. Isaac Urrutia y Eyanir China, “Venezuelan anti-Maduro governor sacked, opposition in chaos”, Reuters, 26 de octubre de 2017. Entrevista de Crisis Group, Juan Pablo Guanipa, Caracas, 19 de septiembre de 2018.

¹⁰ Francisco Toro, “PSUV steals Bolívar State governor’s race”, *Caracas Chronicles*, 19 de octubre de 2017.

¹¹ Una delegación de la MUD celebró negociaciones en Santo Domingo entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, principalmente sobre las condiciones para las elecciones presidenciales de 2018. Los ministros de Relaciones Exteriores de Chile y México, Estados miembros del Grupo de Lima, así como los de Nicaragua y Bolivia actuaron como facilitadores, y el ex primer ministro de España, José Luis Rodríguez Zapatero intentó mediar. Cuando el gobierno anunció unas elecciones programadas para abril, Chile y México se retiraron, y las negociaciones colapsaron poco después. Alexandra Ulmer y Corina Pons, “Venezuela sets presidential vote for April 22 after talks crumble”, Reuters, 7 de febrero de 2018.

cho¹². El 5 de julio Henry Ramos, líder de Acción Democrática, anunció que el partido se retiraba de lo que quedaba de la MUD, dejando a su junta directiva de cuatro partidos (el G4) con solo tres miembros. Ramos se refirió a la incapacidad del grupo de llegar a un acuerdo sobre quién lideraría la coalición, o sobre cómo implementar el resultado del referéndum del 16 de julio.

B. *Persecución por parte del gobierno*

Bajo Maduro, al igual que bajo su predecesor Chávez, el gobierno ha trabajado diligentemente para debilitar y dividir a la oposición, para intimidar o cooptar a sus dirigentes, y para prevenir cualquier iniciativa que pudiera amenazar su control del poder. Estos esfuerzos se han intensificado de forma notable desde que Maduro tomó posesión. Las dos figuras consistentemente más populares de la oposición— el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles y Leopoldo López, líder de Voluntad Popular — han sido inhabilitados para desempeñar cargos públicos, y López, quien permanece bajo arresto domiciliario, está cumpliendo una condena de casi catorce años por supuesta incitación a la violencia.

Los cuatro partidos opositores principales están inhabilitados para participar en las elecciones, y de los partidos que eran miembros de la MUD en el momento de su victoria parlamentaria en 2015, tan solo uno — Avanzada Progresista — es actualmente reconocido por la autoridad electoral¹³. Sin embargo a tres partidos opositores recién formados sí se les ha permitido registrarse. Otra técnica empleada por las autoridades es hacer que el Tribunal Supremo “intervenga” los partidos y otorgue el control de estos a facciones internas que posteriormente se suelen alinear con el gobierno¹⁴.

La persecución violenta de políticos cruzó un nuevo umbral el 8 de octubre con la muerte de un concejal de Caracas, Fernando Albán de Primero Justicia, en la sede del organismo de seguridad estatal (Sebin). Según la versión oficial de los hechos, Albán — que había sido detenido unos días antes, a su regreso de la Asamblea General de la ONU donde acompañó al líder de su partido Julio Borges — se suicidó lanzándose por una ventana del décimo piso. Sin embargo, hay muchas inconsistencias en la versión del gobierno, y la oposición ha afirmado que miembros de la Sebin lanzaron su cuerpo después de que muriera bajo tortura¹⁵. El gobierno acusó a Albán de participar en un supuesto intento de asesinato de Maduro usando un dron cargado con explosivos, de lo que también acusó al legislador opositor Juan Requesens, quien

¹² El resultado oficial dio el 68 por ciento de los votos a Maduro, el 21 por ciento a Falcón y el 11 por ciento al tercer candidato, Javier Bertucci, un pastor evangélico. La participación fue la más baja desde el establecimiento de la democracia en 1958: oficialmente participó el 46 por ciento del electorado, pero varios cálculos independientes sugirieron que la cifra habría sido inferior al 30 por ciento. Falcón acusó a la campaña de Maduro de violar las leyes electorales mediante la compra de votos y la coacción y exigió unas nuevas elecciones. Alonso Moleiro, “Falcón rechaza el resultado que proclama a Maduro y llama a organizar nuevas elecciones”, *El País*, 21 de mayo de 2018.

¹³ Eugenio Martínez, “Only one party from 2015’s MUD survives the government’s purge”, *Caracas Chronicles*, 18 de septiembre de 2018.

¹⁴ Griselda Colina, “El Nuevo Ecosistema de Partidos Políticos en Venezuela”, Observatorio Global de Comunicación y Democracia, septiembre de 2018.

¹⁵ Ronny Rodríguez Rosas, “Las interrogantes sobre la muerte del concejal Fernando Albán”, *Efecto Cocuyo*, 9 de octubre de 2018.

permanece bajo custodia de la Sebin y supuestamente también habría sido torturado (véase a continuación, y la Sección III)¹⁶.

No son solo los políticos opositores quienes tienen motivos para temer la persecución. Al contrario que las dictaduras militares del último siglo, el gobierno de Venezuela no ha recurrido a los asesinatos en masa o las desapariciones. Pero uno de los motivos por los cuales es muy difícil presionar al gobierno mediante manifestaciones callejeras desde las concentraciones masivas de 2017 es el grave riesgo de lesiones, encarcelamiento o muerte. “Yo iba ir a las manifestaciones, pero ahora tengo miedo”, dijo un activista opositor. “Mis cuatro hijos iban, pero ellos también tienen miedo, después de ver lo que le ha pasado a tanta gente que conocían”. En algunos casos, este miedo también ha llevado a los venezolanos a perder la fe en políticos que aún están comprometidos con una solución negociada. El mismo activista dijo: “Yo era de la oposición moderada, pero ahora estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice María Corina [Machado de Soy Venezuela]”¹⁷.

C. *La legislatura que no puede legislar*

Más de trece millones de venezolanos (una participación de más del 70 por ciento) votaron en las elecciones parlamentarias de 2015, y a los legisladores que eligieron les quedan más de dos años de mandato. Pero el gobierno ha asfixiado al parlamento controlado por la oposición, prácticamente clausurándolo del todo. El Tribunal Supremo ha revocado todas las leyes aprobadas por el parlamento por considerarlas inconstitucionales o económicamente inviables (el sustento legal de estos últimos fallos es dudoso). Los ministros se niegan a asistir a las audiencias parlamentarias y el Ejecutivo ha pasado por alto el requerimiento constitucional de que la Asamblea Nacional apruebe el presupuesto o los decretos de emergencia del presidente¹⁸. La debilidad de la legislatura la ha desacreditado ante el público. Según una encuesta reciente, la confianza en la Asamblea Nacional era del 21,6 por ciento, mientras que la MUD registró un 19,9 por ciento. La confianza en el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la Asamblea Constituyente es del 22,3 y el 24,9 por ciento respectivamente¹⁹.

¹⁶ “Jorge Rodríguez: Borges es el autor intelectual del atentado contra Maduro”, *Primicias* 24, 19 de octubre de 2018. El gobierno niega haber violado los derechos humanos de Requesens, y el fiscal general Tarek William Saab ha dicho que quienes cuestionan la versión oficial de la muerte de Albán están cometiendo un “delito” que acarreará “consecuencias”. “Gobierno muestra fotos de Requesens en la CIDH pero impide que familiares lo vean”, *Tal Cual*, 4 de octubre de 2018; Dengrismar Gutiérrez, “A quienes insistan que Albán fue asesinado, estarán cometiendo un delito”, *Diario La Verdad*, 18 de octubre de 2018.

¹⁷ Entrevista de Crisis Group, profesor universitario, Mérida, 11 de octubre de 2018.

¹⁸ Maduro ha gobernado por decreto desde enero de 2016 bajo un estado de emergencia impuesto inmediatamente después de que la oposición tomara el control de la Asamblea Nacional. Ha sido renovado dieciséis veces, en violación del artículo 338 de la Constitución de 1999, que exige que el parlamento apruebe tales medidas. El 10 de septiembre de 2018, los términos del estado de emergencia se ampliaron aún más, permitiendo al presidente, por ejemplo, obtener financiamiento extranjero sin la aprobación de la Asamblea. “Maduro asume más poderes supremos con su decreto de ‘emergencia económica,’” *El Estímulo*, 12 de septiembre de 2018.

¹⁹ Encuesta de Delphos para el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica, octubre-noviembre de 2018. Las cifras representan el número de encuestados con “cierta” o “mucho” confianza.

Alguien que visite el centro de Caracas verá a miembros de un escuadrón antidisturbios de la Guardia Nacional descansando a la sombra de un árbol a la entrada del edificio del parlamento. En teoría están allí para proteger a los diputados, pero en tres ocasiones la Guardia ha permitido a los simpatizantes del gobierno invadir el edificio, golpeando y robando a los legisladores²⁰. “Si nos lanzan piedras cuando entramos”, dice un diputado, “lo más que hace la Guardia es levantar sus escudos para protegernos, pero jamás detienen a quienes nos lanzan piedras”²¹. En ocasiones los soldados también han obstaculizado el acceso de la prensa a la Asamblea Nacional, que está obligada a compartir el edificio con la ANC chavista. A pocos metros de allí, el gobierno ha convertido un edificio expropiado en un edificio de oficinas de aspecto muy permanente para los miembros de la ANC. Allí cerca, un mensaje estampado en la pared dice, “Ellos tienen la Asamblea [Nacional], pero nosotros tenemos las calles”.

El ejecutivo ahora administra los fondos presupuestarios asignados al parlamento constitucionalmente autónomo, que no recibe ningún dinero para el mantenimiento o suministros. Los diputados tienen que pagar de su bolsillo el material de oficina, el agua de beber y el café²². La cantina ha cerrado. Los diputados no reciben salario ni expensas, y ni ellos ni los 3 500 funcionarios parlamentarios (más unos 6 000 jubilados) tienen seguros de salud²³. Muchos miembros de la ANC, por el contrario, reciben alojamiento y gastos de desplazamiento a expensas del gobierno. Algunos de ellos se alojan en las principales instalaciones militares de Caracas y se trasladan en aviones militares²⁴.

El papel constitucional de la Asamblea Nacional ha sido usurpado, primero por el Tribunal Supremo y después – desde agosto de 2017 – por la Asamblea Nacional Constituyente, que en efecto ha actuado como una legislatura paralela²⁵. Las amenazas de encarcelamiento han obligado a una docena de diputados a abandonar sus escaños; hasta ahora, seis se han exiliado. Uno de ellos, Freddy Guevara de Voluntad Popular, ha pasado el último año en la embajada chilena. Varios han sido encarcelados, en violación de su inmunidad parlamentaria, a media docena se les ha anulado el pasaporte y dos están inhabilitados para presentarse a cargos de elección popular²⁶. El caso de Juan Requesens es uno de los más graves. El 7 de agosto fue deteni-

²⁰ “Pro-government supporters’ attack on parliament worsens Venezuela’s crisis”, EFE, 6 de julio de 2017.

²¹ Entrevista de Crisis Group, diputado opositor, Caracas, 1 de octubre de 2018.

²² Entrevistas de Crisis Group, diputados opositores, Caracas, 19 de septiembre y 1 de octubre de 2018.

²³ Roberto Barraza, un periodista de 35 años de edad que trabajaba para la Asamblea Nacional, murió el 16 de septiembre de 2018 al no recibir tratamiento médico por no tener seguro de salud. Entrevista de Crisis Group, diputado opositor, Caracas, 1 de octubre de 2018.

²⁴ Thiany Rodríguez, “ANC perdió al menos 40 de sus constituyentes”, *Panorama*, 22 de enero de 2018.

²⁵ La ANC está debatiendo la nueva constitución principalmente a puerta cerrada, y si bien han circulado algunos supuestos borradores, sigue sin estar claro qué contendrá el texto, cuándo estará terminado y si será sometido a referendo. La primera dama, Cilia Flores, es una de las personas involucradas en redactarla, mientras que los medios recientemente revelaron la identidad de otras veinte personas que participan en el proceso. Ibis León, “Estos son los 20 constituyentes que redactarán la nueva Constitución de Venezuela”, *Efecto Cocuyo*, 19 de septiembre de 2018.

²⁶ Rafael León, “Arrecia persecución del gobierno: un diputado está preso y 5 en el exilio”, *El Nacional*, 19 de agosto de 2018. Los servicios de seguridad del Estado capturaron a Requesens, acusándolo de participar en el supuesto intento de asesinato contra Maduro. Se lo ha mantenido incomunicado

do arbitrariamente, supuestamente en conexión con el ataque con drones contra Maduro tres días antes, y obligado a “confesar” por video, supuestamente tras haber sido drogado. En otro video (presuntamente filtrado por los servicios de seguridad) aparecía en ropa interior manchada en un baño en la sede del Sebin²⁷.

Los diputados de distritos alejados de Caracas no solo tienen que costear sus propios gastos de desplazamiento, sino que a menudo realizan largos viajes por carretera al interior del país debido a la falta de vuelos internos. Algunos legisladores opositores informan que las autoridades de aviación civil y el Sebin han obligado a las aerolíneas a cancelar sus reservas o han retenido vuelos para obligarlos a desembarcar²⁸. Algunos partidos proporcionan ayuda financiera a sus diputados, pero en función de cada caso. La Constitución prohíbe el financiamiento público de partidos políticos. “A veces no hay quórum”, dijo uno de ellos, “no porque [los diputados] no quieren asistir, sino porque no pueden hacerlo”²⁹.

D. *Luchas internas en la oposición*

No todas las amenazas contra la Asamblea Nacional, o contra los dirigentes de la oposición interna, provienen del gobierno. Las facciones opositoras más duras consideran a los moderados una “falsa” oposición dispuesta a “colaborar” con el gobierno a la que solo le interesa negociar las condiciones de su propia supervivencia³⁰. Un aliado clave de estas facciones es un organismo autodenominado Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio, cuyos miembros fueron elegidos por el parlamento el 21 de julio de 2017. El objetivo en esa ocasión era reemplazar a trece jueces y veinte sustitutos cuyo nombramiento “expres” en diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional saliente, dominada por el gobierno, consideran inconstitucional³¹. Obligados a huir del país bajo amenaza de encarcelamiento, estos jueces se proclamaron Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio y comenzaron a dictar sentencias³². El 15 de agosto de 2018 “condenaron” a Nicolás Maduro por corrupción y lo “sentenciaron” a dieciocho años en una prisión militar.

desde entonces, en violación de las normas del debido proceso y la inmunidad parlamentaria. El gobierno difundió una “confesión” grabada en video.

²⁷ Ibis León, “Diputado Juan Requesens cumple un mes preso y aislado en el Sebin”, *Efecto Cocuyo*, 7 September 2018; Shari Avedaño, “Video de Requesens semidesnudo fue de un chequeo médico ‘privado’, según Maduro”, *Efecto Cocuyo*, 11 de agosto de 2018.

²⁸ Entrevistas de Crisis Group, diputados opositores, Caracas, 19 de septiembre y 1 de octubre de 2018.

²⁹ Entrevista de Crisis Group, diputado de un distrito electoral provincial, Caracas, 1 de octubre de 2018.

³⁰ “Muchacho destacó que existen ‘dos oposiciones’: la colaboracionista y la resistencia”, *Caraota Digital*, 21 de noviembre de 2017.

³¹ Estos jueces partidarios del gobierno han desempeñado un papel fundamental a la hora de emitir fallos que restringen los poderes del parlamento. Su intento de asumir poderes parlamentarios en marzo de 2017 desencadenó las masivas protestas que siguieron. Sus nombramientos no solo fueron aprobados de forma apresurada, violando los procedimientos legales, sino que al menos diez de los trece no cumplían con los requisitos del cargo. Además, el fiscal general – cuya firma se requiere – no firmó para indicar su apoyo. “¿Qué dice la sentencia no. 454 de la Sala Constitucional del TSJ?”, Acceso a la Justicia, 29 de junio de 2017.

³² La toma de posesión de los jueces tuvo lugar en la sede de la OEA en Washington el 13 de octubre de 2017. Algunas audiencias se han celebrado en Bogotá gracias al Senado colombiano.

A pesar de su dudoso estatus constitucional, el “tribunal” ha exigido que se cumpla su sentencia³³. El 21 de agosto la Asamblea Nacional cedió a la presión del ala dura y del secretario general de la OEA y ratificó la decisión, pese a no haber recibido una solicitud formal para que lo hiciera³⁴. El 5 de septiembre, los jueces acordaron considerar una solicitud de nombrar a una “junta de gobierno de emergencia”, que en la práctica sería un gobierno en el exilio. Varios de los jueces, no obstante, se han desvinculado de las acciones del “tribunal en el exilio”, que parece estar coordinado por el ala dura de la oposición que desea reemplazar el liderazgo interno con figuras más de su agrado³⁵.

E. *El Frente Amplio: hacia una alianza opositora más amplia*

El 8 de marzo de 2018 la oposición tradicional lanzó un “frente amplio” con el fin no de reemplazar a la MUD, sino de incorporar a la sociedad civil a la lucha por unas elecciones libres y justas. Este frente – el Frente Amplio Venezuela Libre – reúne a sindicalistas, trabajadores de ONG y universidades, líderes empresariales y religiosos, así como partidos opositores de dentro y fuera de la MUD, incluidos chavistas disidentes. Su primera campaña fue para rechazar las elecciones presidenciales del 20 de mayo y la ANC y exigir un nuevo voto presidencial, bajo condiciones acordadas, en enero de 2019. El frente opera no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional e incluso municipal.

Sin embargo, en la práctica el Frente Amplio no ha logrado revivir la suerte de la oposición y ahora parece casi tan moribundo como la propia MUD. Las encuestas muestran que hasta ahora ha sido vista simplemente como una versión ampliada de la MUD, y algunos dirigentes admiten que la relación interna entre los representantes de la sociedad civil y los partidos de la oposición ha sido difícil³⁶. Ninguno de los dos confía plenamente en el otro. El 24 de septiembre, el Frente celebró una reunión masiva para debatir la estrategia en un intento de relanzar el movimiento. Los delegados acordaron un triple enfoque: la creación de un comité para organizar una huelga general; la redacción de un programa que sería adoptado por un gobierno transicional; y un congreso en octubre para elegir un liderazgo político. Pero el relanzamiento no logró poner fin a la parálisis³⁷.

³³ Los jueces no fueron nombrados por la Asamblea Nacional en sustitución del Tribunal Supremo y su asunción de ese rol carece de base constitucional. Acceso a la Justicia, “Seis preguntas claves sobre la actuación del TSJ en el exilio”, *Tal Cual*, 16 de abril de 2018. En una medida sin precedentes, el secretario general de la OEA Almagro respaldó a los jueces enviando una carta al presidente de la Asamblea Nacional Omar Barboza en la que afirmaba que el acatamiento de la sentencia era “un paso esencial para la transición a la democracia” y “el no acatamiento lo transformaría en cómplice de una dictadura que ha destruido al país”.

³⁴ La controversia surgió cuando se supo que una versión de la sentencia instaba a investigar al ex candidato presidencial de la MUD (y líder moderado) Henrique Capriles por supuestos vínculos con un gran escándalo de sobornos que involucraba al gigante brasileño de la construcción Odebrecht. Ibis León, “TSJ en el exilio aclara que Capriles no fue señalado en juicio contra Maduro por corrupción”, *Efecto Cocuyo*, 27 de agosto de 2018.

³⁵ Sofía Torres, “Se desmoronó el llamado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio”, *El Universal*, 1 de octubre de 2018.

³⁶ Entrevista de Crisis Group, líderes del Frente Amplio, Caracas, 29 de junio de 2018.

³⁷ A fecha de publicación de este informe, el Frente Amplio estaba preparando otro congreso, previsto para el 23 de noviembre, en un intento de determinar la forma de proceder.

La división entre los políticos y los líderes de la sociedad civil sigue siendo un obstáculo clave. Muchos de estos últimos creen que los políticos consideran que sumar fuerzas con las organizaciones de la sociedad civil es a lo mejor una lamentable necesidad temporal. “Muchos partidos [políticos] consideran que la transición es apenas un ‘momento’, y la unidad es necesaria para destituir al presidente pero no en el mediano plazo”, señaló un participante del Frente Amplio. “Pero deshacerse de Maduro [en sí mismo] no es un objetivo estratégico”³⁸. Si bien algunos miembros de la sociedad civil se quejan de que los partidos quieren dominar el movimiento opositor, excluyendo a otras organizaciones, también hay quejas cuando los políticos se mantienen al margen³⁹. En general, el Frente Amplio refleja la incapacidad de incluso la oposición moderada de unirse en torno a una única estrategia y liderazgo.

F. *Unidad “subóptima”*

Desde la ruptura de facto de la MUD, los líderes opositores que siguen estando comprometidos con una solución no violenta a la crisis se han reunido “esporádicamente” para mantener negociaciones cuyo objetivo es, en palabras de un observador cercano, una unidad “subóptima”⁴⁰. Las principales figuras involucradas son Henri Falcón, Henrique Capriles, Henry Ramos Allup y los líderes de Un Nuevo Tiempo. Capriles, no obstante, no habla en nombre de su partido, Primero Justicia, cuyo líder exiliado Julio Borges ahora se codea con figuras más radicales como Antonio Ledezma. Voluntad Popular también está dividida en torno a la estrategia, aunque su líder Leopoldo López no está a favor de la intervención militar⁴¹. Voluntad Popular, el partido de Borges Primero Justicia y un partido más pequeño llamado La Causa R, también están intentando desarrollar una estrategia unificada propia, y recientemente emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaban los intentos del gobierno de reiniciar el diálogo⁴².

La reunificación se complica aún más por la relación cada vez más difícil entre los líderes opositores que están en Venezuela y los que están en el exilio. Estos últimos tienden hacia posturas más radicales y son propensos a desdenar a los que se quedan atrás como “colaboracionistas” que buscan algún tipo de coexistencia con el sistema gobernante. La situación se ve agravada por un coro de voces intransigentes en los medios sociales, donde los insultos a menudo pesan más que los argumentos razonados. Los políticos en Venezuela cuestionan si los que están en el exilio verdaderamente representan las demandas públicas y captan la realidad sobre el terreno. El liderazgo desde el exterior en algunos casos parece estar socavando activamente lo que queda de la representación democrática en el país, en particular la Asamblea Nacional⁴³.

³⁸ Entrevista de Crisis Group, líder de la sociedad civil, Mérida, 11 de octubre de 2018.

³⁹ Entrevista de Crisis Group, ex líder de la MUD, Caracas, 10 de octubre de 2018.

⁴⁰ Entrevista de Crisis Group, ex asesor de la MUD, Caracas, 31 de agosto de 2018.

⁴¹ Entrevista de Crisis Group, líder de Voluntad Popular, Caracas, 1 de agosto de 2018.

⁴² “Carta abierta de los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular y la Causa R al pueblo de Venezuela”, 28 de octubre de 2018.

⁴³ Entrevista de Crisis Group, analista político venezolano, Caracas, 23 de septiembre de 2018. “Patricia Poleo: quienes participen en las elecciones son colaboracionistas del régimen”, Venepress, 22

III. Resistencia pacífica vs. violenta

La oposición tradicional siempre ha insistido que su estrategia es “pacífica, democrática y electoral”, y si bien una minoría ha desechado este enfoque por considerarlo ingenuo, la resistencia armada se ha limitado a incidentes aislados. Pero a medida que el gobierno ha avanzado con mayor determinación para bloquear las rutas pacíficas hacia una transición política, la frecuencia de tales incidentes ha aumentado. El piloto de la policía Oscar Pérez robó un helicóptero en junio de 2017 y lanzó lo que podrían haber sido granadas de concusión sobre el Tribunal Supremo antes de pasar a la clandestinidad y formar un pequeño grupo rebelde. En enero del año siguiente, las fuerzas del gobierno lo localizaron y lo ejecutaron, junto con seis camaradas, después de que ofreciera rendirse por medio de una serie de videos publicados en las redes sociales⁴⁴. En agosto de 2017 un grupo liderado por el ex soldado Juan Carlos Caguaripano asaltó un cuartel del ejército en la ciudad de Valencia y robó armas. Dos miembros del grupo fueron asesinados y siete capturados. Posteriormente las autoridades capturaron al propio Caguaripano en Caracas y publicaron un video donde se lo veía supuestamente sufriendo los efectos de la tortura⁴⁵.

En marzo de 2018, el gobierno, con ayuda de los servicios de inteligencia cubanos, supuestamente desbarató una conspiración golpista cuyo objetivo era frustrar las elecciones presidenciales de mayo⁴⁶. Y el 4 de agosto de 2018 dos drones explotaron cerca de un desfile militar en lo que parece haber sido un intento de asesinato contra Maduro. Siete soldados supuestamente resultaron heridos. El gobierno detuvo a varias docenas de personas y culpó a los líderes opositores del atentado⁴⁷. A octubre, la organización de derechos humanos Foro Penal estimó el número de oficiales militares detenidos por supuestas conspiraciones en 77⁴⁸.

Sin embargo, desde agosto de 2017, cuando el presidente estadounidense Donald Trump dijo que estaba considerando una “opción militar” en Venezuela, la mayor parte de la especulación se ha centrado en la posibilidad de una intervención militar externa o un golpe de estado apoyado por Washington. En un discurso a principios de 2018, el entonces secretario de Estado Rex Tillerson señaló que los militares “a menudo” desencadenan cambios políticos en América Latina. También dijo que la

de febrero de 2018. “Muchacho: a la oposición en resistencia solo le espera cárcel y exilio”, *El Nacional*, 21 de noviembre de 2017. Véase también la sección II.D más arriba.

⁴⁴ Nicholas Casey, “Venezuela’s most-wanted rebel shared his story, just before death”, *The New York Times*, 21 de enero de 2018.

⁴⁵ “¿Quién es Juan Caguaripano, el capitán que se rebeló contra Maduro?”, *El País*, 7 de agosto de 2017; Eukaris Pérez, “Sebin sometió a fuertes torturas al capitán Caguaripano”, *Tal Cual*, 5 de febrero de 2018.

⁴⁶ Ethan Bronner, Andrew Rosati y Fabiola Zerpa, “Inside the failed plot to overthrow Venezuelan President Nicolás Maduro”, *Bloomberg*, 27 de junio de 2018; Ernesto Londoño y Nicholas Casey, “Trump administration discussed coup plans with rebel Venezuelan officers”, *The New York Times*, 8 de septiembre de 2018.

⁴⁷ Brian Ellsworth y Vivian Sequera, “Venezuela arrests six over drone explosions during Maduro’s speech”, *Reuters*, 5 de agosto de 2018; Kejal Vyas, “Venezuela’s president pushes crackdown in wake of drone attack”, *Wall Street Journal*, 9 de agosto de 2018.

⁴⁸ “Foro Penal cifró en 234 el número de ‘presos políticos’ en el país”, *Foro Penal*, 26 de octubre de 2018.

Doctrina Monroe era “tan válida hoy como en el día que fue escrita”, lo que trajo amargos recuerdos del intervencionismo estadounidense en América Latina⁴⁹. A finales de agosto Marco Rubio, un senador republicano de Florida con una influencia considerable en las políticas de Washington en América Latina, planteó la posibilidad de una intervención estadounidense, afirmando que Venezuela se había convertido en “una amenaza para la región e incluso para los Estados Unidos”⁵⁰.

El secretario general de la OEA Luis Almagro posteriormente realizó comentarios aún más explícitos que los de Rubio. Hablando desde la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, al lado del canciller colombiano Carlos Holmes, Almagro dijo que “en cuanto a una intervención militar para derrocar el régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción”⁵¹. Si bien posteriormente declaró que se estaba refiriendo a acciones “dentro del marco del sistema de derecho interamericano y derecho internacional público”, su postura parecía esencialmente idéntica a la del líder de Soy Venezuela, Antonio Ledezma. Durante meses, Ledezma ha insistido que la única solución a la crisis es una “intervención humanitaria” basada en la doctrina de la “responsabilidad de proteger” (R2P) de la ONU. Sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, no obstante, dicha intervención sería ilegal, y probablemente considerada ilegítima por la mayoría de los gobiernos, incluidos los de América Latina. Como mínimo, los miembros permanentes del Consejo y los aliados de Maduro, Rusia y China, sin duda vetarían cualquier propuesta en este sentido; de hecho, no es de esperar que otros miembros del Consejo la apoyen incluso si EE.UU. la propusiera – lo que en sí mismo parece improbable⁵².

Aparte de las cuestiones de legalidad y legitimidad, lo más probable es que una intervención militar externa desestabilizaría el país y agravaría la crisis mucho más que ayudaría a poner fin a ella. El único liderazgo opositor que reivindica claramente el liderazgo de la transición es la Asamblea Nacional. Pero muchos de los que proponen una intervención militar rechazan este liderazgo. Prefieren el nombramiento previo de un “gobierno en el exilio”, pero este organismo sería igualmente polémico, y si fuera impuesto por una acción militar externa plantearía serios interrogantes en cuanto a su representatividad y legitimidad, lo que repercutiría en su capacidad de gobernar el país eficazmente.

La creencia generalizada es que las fuerzas armadas venezolanas no podrían ofrecer mucha resistencia. Pero esa suposición pasa por alto las enormes cantidades de armamento militar adquiridas tanto por el gobierno de Chávez como el de Maduro⁵³.

⁴⁹ “U.S. Engagement in the Western Hemisphere: Remarks by Rex W. Tillerson, U.S. Secretary of State, at the University of Texas at Austin”, Departamento de Estado de los EE.UU., 1 de febrero de 2018.

⁵⁰ Ramsey Touchberry, “Marco Rubio: U.S. military intervention could solve Venezuela crisis”, *Newsweek*, 1 de septiembre de 2018.

⁵¹ “OAS chief says should not rule out Venezuela ‘military intervention’”, Agence France Presse, 15 de septiembre de 2018.

⁵² “China rejects new U.S. sanctions against Venezuela, calls for internal solutions”, Telesur, 28 de agosto de 2017; “Russia condemns U.S. interference in Venezuela as ‘self-centered’”, Telesur, 30 de septiembre de 2018.

⁵³ “Venezuela: Informe sobre Adquisiciones de Sistemas de Armas y Material Militar, Período 2013-2016”, Control Ciudadano, 4 de enero 2017; “Venezuela: Adquisiciones de Sistemas de Armas y Material Militar 2005-2012. Un proceso completamente opaco para el país”, Control Ciudadano, 15 de abril de 2013.

Ciertas partes de las fuerzas armadas, incluidas las milicias civiles, podrían activar planes para llevar adelante una “guerra popular prolongada”, como reclama la doctrina militar oficial⁵⁴. Es improbable que cualquier potencia interviniente esté dispuesta a ocupar Venezuela a fin de restaurar el orden, que también sería duramente puesto a prueba por una amplia gama de actores armados no estatales, muchos de los cuales tienen un claro interés en mantener el statu quo o fomentar el caos⁵⁵. Estos incluyen las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, que tienen un compromiso explícito con defender el gobierno de Maduro⁵⁶. En estas circunstancias es improbable que llegue la inversión extranjera directa y ayuda multilateral que el país necesitará desesperadamente para estabilizar su economía. La intervención militar, en otras palabras, es una receta para aún más caos y sufrimiento para los venezolanos.

⁵⁴ Rubén Castillo (Misión Verdad), “Escenarios de intervención militar: las capacidades de Venezuela para defenderse”, *Resumen Latinoamericano*, 28 de septiembre de 2018.

⁵⁵ Informe de Crisis Group sobre América Latina N°38, *Violencia y política en Venezuela*, 17 de agosto de 2011.

⁵⁶ En su V Congreso celebrado en diciembre de 2014, el ELN aprobó una resolución que ratificaba su determinación de “defender la revolución Bolivariana de Venezuela en caso de una violenta agresión imperialista”.

IV. Divisiones en la oposición y la perspectiva de unas negociaciones

El creciente clamor por una intervención militar en Venezuela y las divisiones cada vez más profundas en las filas opositoras son enormes obstáculos en el camino hacia la reanudación de las negociaciones con el gobierno en Caracas sobre una transición política. Tras el amargo colapso de las negociaciones en Santo Domingo a principios de 2018, que siguió al fracaso de las negociaciones en 2014 y 2016, la mayoría de la oposición en cualquier caso tiende a tratar cualquier nuevo intento con cautela. La última vez, los líderes de la MUD pagaron un elevado costo político por su participación.

Maduro ha insistido en su voluntad de retomar el “diálogo” con la oposición. El “mediador” preferido por el gobierno – el ex primer ministro de España José Luis Rodríguez Zapatero – visita Caracas de cuando en cuando, pero los líderes opositores lo rechazan como un cómplice del gobierno⁵⁷. A mediados de octubre, en un almuerzo informal para ministros de Relaciones Exteriores europeos, los gobiernos español y portugués ofrecieron facilitar una nueva ronda de negociaciones. Pero la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, dijo que ni la mediación ni el diálogo eran posibles en las actuales circunstancias.

Añadió que “solo una solución política democrática” podría resolver la crisis, y que la UE iba “a explorar la posibilidad de establecer un grupo de contacto” de Estados dispuestos a trabajar por unas futuras negociaciones⁵⁸. La ausencia de “condiciones” que menciona parece referirse no solo a la falta de un interlocutor opositor sino también a la negativa del gobierno – hasta ahora – a comprometerse con unas reformas serias. En un discurso posterior, Mogherini dijo que la UE había instado al gobierno a participar en “medidas de fomento de la confianza”, incluida la liberación de presos políticos, la restauración de los derechos del parlamento y la garantía de los derechos humanos. Además reclamó una investigación imparcial de la muerte en custodia del concejal Fernando Albán.

Las facciones opositoras probablemente no ganarían mucho con unas nuevas negociaciones con el gobierno a no ser que se cumplieran tres condiciones: primero, un claro compromiso de Maduro de que lo que está sobre la mesa son reformas genuinas; segundo, medidas de fomento de la confianza, que podrían incluir la liberación de presos políticos, la relajación de la persecución de figuras opositoras y la restauración de la autoridad de la Asamblea Nacional; y tercero, el acuerdo del gobierno sobre una agenda de negociaciones basada en la restauración de controles y contrapesos, el retorno de la política representativa, y un plan de estabilización y reconstrucción económica. Unas negociaciones sin estas medidas (junto con una facilitación internacional, un procedimiento estructurado y firmes reglas de juego) correrían el riesgo de repetir los errores de las anteriores rondas de diálogo al brindar al gobierno una oportunidad de parecer conciliador y calmar la ira popular sin hacer concesiones

⁵⁷ Xabier Coscojuela, “Borges a Zapatero: Usted es cómplice de Maduro y un enemigo de Venezuela”, *Tal Cual*, 18 de mayo de 2018. El 6 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó una moción de censura contra Zapatero que desencadenó un amargo debate entre facciones opositoras. Alonso Moleiro, “Zapatero divide a la oposición venezolana”, *El País*, 9 de noviembre de 2018.

⁵⁸ Servicio Europeo de Acción Exterior, declaración de Federica Mogherini, 15 de octubre de 2018.

sustantivas ni proporcionar ninguna garantía de que cumplirá sus promesas. Si las facciones opositoras iniciaran las negociaciones en ausencia de esas condiciones, esto también exacerbaría las divisiones y generaría aún más desilusión.

Ahora mismo, no obstante, incluso si el gobierno estuviera dispuesto a iniciar reformas genuinas, las divisiones de la oposición no dejan claro quienes estarían sentados al otro lado de la mesa. No existe un claro interlocutor del gobierno y, por sí solo, ninguno de los componentes de la oposición puede ofrecer al gobierno suficientes garantías de que apoyará y cumplirá cualquier acuerdo. Una notable excepción podría ser la Asamblea Nacional, que podría dar el visto bueno a los préstamos internacionales, como lo requiere la Constitución⁵⁹. No obstante, dadas las sanciones financieras internacionales vigentes, el parlamento por sí solo no puede aliviar la grave escasez de efectivo del gobierno, mientras que las transacciones ad hoc entre el gobierno y los líderes opositores en la Asamblea para mitigar la emergencia financiera del Estado probablemente no sean sostenibles, y sembrarían una mayor discordia interna en la oposición. No obstante, si llegaran a ponerse en marcha unas negociaciones más estructuradas y sustanciales según los lineamientos planteados anteriormente, los representantes de la Asamblea Nacional podrían argumentar en Washington a favor del levantamiento de las sanciones financieras.

Las opiniones sobre cómo reconstruir un liderazgo opositor viable varían ampliamente. Algunos creen que, a falta de una campaña presidencial inminente que exija que la oposición celebre elecciones primarias y seleccione un candidato, la única forma de resolver la cuestión es acordar un liderazgo colectivo⁶⁰. Otros quieren que la Asamblea Nacional apruebe el nombramiento de un “gobierno en el exilio”⁶¹. Una tercera sugerencia es reunir a un grupo de ciudadanos respetados sin ambiciones políticas ocultas cuyo prestigio y percibida neutralidad (entre las diferentes facciones opositoras) pueda servir para unir a la oposición en torno a una estrategia coherente⁶². Otro plan propone celebrar primarias abiertas para elegir al liderazgo sin esperar a unas elecciones presidenciales⁶³.

⁵⁹ El artículo 312 de la Constitución de 1999 exige que el Ejecutivo solicite la aprobación de la Asamblea Nacional antes de emitir deuda.

⁶⁰ Entrevista de Crisis Group, líder de Voluntad Popular, Caracas, 1 de agosto de 2018.

⁶¹ Antonio María Delgado, “Fiscal y magistrados de Venezuela en el exilio podrían ser la puerta a un eventual gobierno paralelo”, *El Nuevo Herald*, 20 de abril de 2018.

⁶² Margarita López Maya, “Urge una conducción política de las fuerzas democráticas”, *Proavinci*, 20 de agosto de 2018.

⁶³ Benigno Alarcón Daza, “Cómo producir una transición democrática en Venezuela”, *Proavinci*, 23 de septiembre de 2018.

V. Participación internacional

La participación internacional reciente en la crisis venezolana ha adoptado numerosas formas que incluyen sanciones, amenazas de intervención militar, la remisión de Venezuela a la Corte Penal Internacional, así como iniciativas incipientes destinadas a volver a llevar a las partes a la mesa de negociaciones.

El 25 de septiembre, Washington anunció nuevas sanciones contra altos funcionarios venezolanos, incluida la primera dama, Cilia Flores, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, y un supuesto testaferro de Diosdado Cabello, presidente de la ANC⁶⁴. La iniciativa afectó a todos los miembros del círculo íntimo de Maduro, lo que sugiere que la administración Trump ya no considera que las negociaciones vayan a surgir de una escisión “vertical” en la facción dominante, sino que pretende enviar un claro mensaje a quienes están más abajo en la cadena de mando de que aún están a tiempo de disociarse del gobierno⁶⁵.

Varios actores internacionales han evocado la posibilidad de una acción militar, entre ellos no solo el secretario general de la OEA y el senador estadounidense Marco Rubio, sino también el embajador colombiano en Washington, Francisco Santos⁶⁶. Pero como se señaló anteriormente, la mayoría de los catorce miembros del Grupo de Lima insisten en una solución pacífica negociada. Es cierto que cuatro de sus miembros no firmaron el último comunicado a tal efecto y tres de ellos – Colombia, Guayana y Panamá – podrían denominarse “Estados de primera línea” en cuanto a la crisis venezolana (el cuarto es Canadá). Pero todos han afirmado explícitamente que no están a favor de una opción militar. Su renuencia a firmar el comunicado parece apuntar a una pérdida de fe en las negociaciones, al menos en el corto plazo, y tanto sus comentarios públicos como sus conversaciones privadas dejan claro que gran parte del problema es su frustración con la incapacidad de la oposición de presentar un frente unificado⁶⁷.

El gobierno venezolano ha respondido a los rumores de intervención con sus propias declaraciones belicosas y desplazando tropas y equipamiento a la frontera colombiana. El 28 de septiembre el jefe del Estado Mayor Conjunto, el Almirante Remigio

⁶⁴ Carol Morello y Anthony Faiola, “U.S. sanctions target Venezuela’s first lady and president’s inner circle”, *Washington Post*, 25 de septiembre de 2018.

⁶⁵ “Además de llevar a los responsables ante la CPI, la comunidad internacional ha emprendido una estrategia para provocar una ruptura entre mandos medios (civiles y militares) y la cúpula que gobierna Venezuela y sería juzgada ante la CPI”, Rocío San Miguel, experta en seguridad y defensa en Venezuela, por medio de Twitter, 29 de septiembre de 2018.

⁶⁶ El recientemente nombrado embajador Santos dijo en un foro en Washington a mediados de septiembre que “se debían considerar todas las opciones”. “Las polémicas declaraciones de Pacho Santos en Washington sobre Venezuela”, *El Espectador*, 18 de septiembre de 2018. Sin embargo, el presidente colombiano Iván Duque ha descartado la posibilidad de una acción militar en varias ocasiones, entre ellas en un evento organizado por Crisis Group en Bruselas el 23 de octubre. El canciller de Colombia, Carlos Holmes, también ha negado que Bogotá esté considerando una acción militar. Pero se vio obligado a amenazar a varios diplomáticos con la destitución por sugerirlo después de que un diario brasileño citara a una fuente anónima de la Cancillería que lo contradecía. “Francisco Santos niega ser la fuente de artículo sobre supuesto plan de derrocar a Maduro”, *Semana*, 31 de octubre de 2018.

⁶⁷ Antonio María Delgado, “Comunidad Internacional busca renovación de liderazgo opositor para salir de Maduro, dice embajador”, *El Nuevo Herald*, 1 de noviembre de 2018.

Ceballos, dijo que Rusia, China y Cuba estaban participando en ejercicios militares y que Venezuela “no está sola” ante las amenazas de intervención. Si bien los tres países nombrados mantuvieron los labios sellados sobre el asunto y no se publicó ninguna imagen, aparentemente estuvieron presentes tropas de los tres países⁶⁸. El presidente colombiano Iván Duque ha dicho que su gobierno “no será provocado”⁶⁹.

El 26 de septiembre, en un gesto sin precedentes, seis jefes de Estado y gobierno del Grupo de Lima (entre ellos Canadá) remitieron el caso de Venezuela a la Corte Penal Internacional⁷⁰. El gobierno francés posteriormente manifestó su apoyo por la medida, que podría acelerar el proceso de llevar a juicio casos de supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro y otros⁷¹. En febrero de este año, la fiscal de la CPI Fatou Bensouda inició una investigación preliminar para establecer si se habían cometido delitos que corresponden a la competencia de la Corte en el contexto de los disturbios políticos desde “al menos” abril de 2017. La decisión de seguir adelante con el caso de la CPI podría complicar cualquier solución negociada al aumentar la probabilidad de que los líderes del gobierno – una vez que salgan del poder – enfrenten algún tipo de justicia. Pero el rechazo del gobierno a unas negociaciones genuinas y el colapso de la unidad de la oposición, entre otros factores, ha llevado a algunos gobiernos a concluir que no hay mucho que perder⁷².

Al mismo tiempo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en la que expresa su preocupación ante los abusos de los derechos humanos en Venezuela, insta al gobierno venezolano a permitir la entrada de ayuda humanitaria para abordar el hambre y la enfermedad en el país, y solicita a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que prepare un informe exhaustivo⁷³. La alta comisionada Michelle Bachelet declaró que para hacer esto tenía que poder visitar el país, y Maduro respondió a las preguntas de los periodistas acerca de esta cuestión diciendo que podía visitar “cuando quiera”⁷⁴.

⁶⁸ Entrevista de Crisis Group, experto en seguridad y defensa de Venezuela, Caracas, 29 de octubre de 2018. Carlos E. Hernández, “Venezuela, China, Rusia y Cuba se despliegan en un ejercicio en la frontera con Colombia”, Infodefensa.com, 2 de octubre de 2018.

⁶⁹ “Duque asegura que no caerá en provocaciones de Venezuela”, RCN Radio, 26 de septiembre de 2018.

⁷⁰ Venezuela es un Estado parte al Estatuto de Roma, lo que significa que la CPI puede investigar delitos cometidos en su territorio sin necesidad de que sean remitidos por el Consejo de Seguridad de la ONU. Esta medida marca la primera vez en la historia de la CPI que un caso ha sido remitido por otros Estados parte. También señala un cambio en la postura tradicional de los países latinoamericanos de “no-interferencia” en los asuntos de sus vecinos, lo que indica la gravedad de la crisis que afecta a Venezuela.

⁷¹ Los países son: Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú (y posteriormente Costa Rica). Su acción otorga a la fiscal de la CPI (que inició una investigación preliminar en febrero de 2018) la opción de proceder con el caso sin antes remitirlo a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI. “Statement by the Prosecutor of the International Criminal Court, Mrs Fatou Bensouda, on the referral by a group of six States Parties regarding the situation in Venezuela”, 27 de septiembre de 2018.

⁷² Entrevista por email de Crisis Group, experto en justicia transicional, 3 de octubre de 2018.

⁷³ “Promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”, 39° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 10-28 de septiembre de 2018.

⁷⁴ “Venezuela president says U.N. human rights chief welcome to visit”, Reuters, 27 de septiembre de 2018. A excepción de un “experto independiente” de la ONU, quien elaboró un polémico informe

Varias iniciativas incipientes buscan revivir las perspectivas de negociación. Una de estas es la propuesta de un “grupo de contacto” mencionada por Federica Mogherini de la UE, que si bien no ofrece una solución inmediata, es el mejor enfoque ya que busca usar la presión internacional para alentar la reanudación de las negociaciones a la vez que se establecen condiciones claras para garantizar que las futuras negociaciones sean sustantivas⁷⁵.

Otra involucra el resurgimiento del bipartidista Grupo de Boston, que originalmente fue una iniciativa de miembros del Congreso estadounidense que, en el periodo posterior al intento golpista contra Hugo Chávez en 2002, buscó fomentar el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición⁷⁶. La reaparición del grupo, a instancias de Maduro, indica no tanto la voluntad de su gobierno de considerar una transición como su necesidad de llegar a un acuerdo con Washington⁷⁷. Una tercera vía, propuesta por el nuevo gobierno español de Pedro Sánchez y aparentemente abandonada – por ahora – debido a la negativa de la UE a contemplarla, conllevaría el “diálogo interno” sin “interferencia” por parte de potencias extranjeras. Esto probablemente permitiría a Maduro seguir ganando tiempo y repetir las inútiles experiencias de los últimos cuatro años⁷⁸.

que favorecía al gobierno, el gobierno no ha permitido a ninguna misión de derechos humanos visitar Venezuela desde 2002.

⁷⁵ Véase la nota al pie 58. Mogherini desarrolló la idea una semana después. Véase el Discurso de la alta representante/vicepresidenta Federica Mogherini en la sesión plenaria del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela, 23 de octubre de 2018. Insistió, no obstante, que no quería “suscitar expectativas” y reiteró que las condiciones “no están maduras, no están ahí”.

⁷⁶ Maduro y su esposa Cilia Flores, ambos miembros de la Asamblea Nacional por aquel entonces, pertenecían al Grupo de Boston. Su coordinador, el entonces legislador Pedro Díaz Blum, y el actual gobernador del estado de Carabobo, el aliado de Maduro Rafael Lacava, han reavivado el grupo para promover el diálogo entre Venezuela y Washington. También están involucrados el presidente saliente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, el senador republicano Bob Corker, de Tennessee, y el integrante de su equipo Caleb McCarry.

⁷⁷ Entrevista de Crisis Group, miembro destacado del Grupo de Boston, Caracas, 14 de septiembre de 2018.

⁷⁸ Pedro R. Suanzes, “España plantea una discusión en la Unión Europea sobre la crisis en Venezuela”, *El Mundo*, 14 de octubre de 2018.

VI. Conclusión

Nunca ha sido tan urgente encontrar una solución a la crisis de Venezuela, y sin embargo nunca ha parecido tan lejana. La emergencia humanitaria – que se ha manifestado en forma de hambre, enfermedad y migración masiva, entre otras cosas – se está agravando rápidamente. Hasta la fecha, las tensiones políticas han paralizado los esfuerzos por atender el sufrimiento de los venezolanos: el gobierno de Maduro rechaza la ayuda con el argumento de que es un pretexto para intervenir, mientras que la oposición refuerza esta demonización de la ayuda utilizándola como palanca para lograr cambios políticos⁷⁹. La diplomacia centrada en garantizar el consentimiento del gobierno al ingreso de ayuda humanitaria debería manejarse por separado de las negociaciones sobre una transición democrática⁸⁰.

No hay duda de que el principal obstáculo tanto en el frente político como en el humanitario es la intransigencia del propio gobierno y su determinación de aferrarse al poder. Pero el lamentable estado de la oposición también convierte cualquier impulso hacia una negociación política en una ardua batalla, y complicaría las negociaciones si llegaran a celebrarse. Una parte considerable de la oposición, así como algunas voces externas influyentes, han perdido la fe en una transición negociada en un futuro próximo, aunque la opción militar (ya sea interna, externa o una combinación de ambas) sigue siendo improbable y sus consecuencias potencialmente catastróficas. Mientras, la crisis económica y social, con su desestabilizador impacto regional, continúa agravándose rápidamente, y las medidas del gobierno de Maduro solo han agudizado el problema, en particular exacerbando la hiperinflación⁸¹.

Uno de los prerrequisitos – aunque dista de ser el único – para poner fin a la crisis es una oposición coherente. De hecho, el éxito de las negociaciones depende de la representación organizada de la oposición. Un grado razonable de unidad también sería fundamental para la formación de un gobierno transicional que incluya a líderes opositores junto con representantes del chavismo; si bien la formación de un gobierno de tales características por ahora parece una perspectiva remota, sigue siendo el camino más seguro para que Venezuela salga de su crisis. Asimismo, una ruptura generada por tensiones internas en el gobierno y el partido gobernante – un escena-

⁷⁹ En este sentido, el nombramiento por parte del secretario general de la OEA Almagro de un político venezolano exiliado (David Smolansky, un ex alcalde de Voluntad Popular) al frente de una unidad de refugiados fue poco acertado, más allá de los méritos personales de Smolansky. Jim Wyss, “He slipped out of Venezuela in disguise; now he’s the OAS migration czar”, *Miami Herald*, 19 de septiembre de 2018.

⁸⁰ El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados Filippo Grandi se hizo eco de este llamado en un discurso al comité ejecutivo de la organización en octubre de 2018. “Un enfoque no político y humanitario es esencial para ayudar a los Estados que están recibiendo un gran número [de refugiados venezolanos]”, dijo Grandi. “Venezuela: nearly 2m people have fled country since 2015, UN says”, *Agence France Presse*, 1 de octubre de 2018. El ex ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala Eduardo Stein, nombrado el 19 de septiembre como representante especial conjunto de las agencias de refugiados y migración de la ONU para la crisis venezolana, también ha pronunciado en este sentido.

⁸¹ “Pronunciamiento de las Academias Nacionales sobre las medidas económicas anunciadas el viernes 17 de agosto de 2018”, 20 de agosto de 2018.

rio poco probable pero no del todo inverosímil – probablemente también requeriría algún tipo de gobierno transicional que incluyera al menos a parte de la oposición.

Resolver el vacío de liderazgo que ha dejado la oposición y recuperar su credibilidad son por lo tanto tareas importantes. La mayor esperanza radica en los líderes de la oposición y la sociedad civil dentro de Venezuela, la mayoría de los cuales aún apoyan una transición negociada. Se enfrentan a dos desafíos principales: defender la Asamblea Nacional como el único pilar restante de la legitimidad democrática en Venezuela; y construir un liderazgo respaldado por los principales partidos y la sociedad civil y capaz de acordar una transición eficaz (principalmente en los ámbitos político, económico y de seguridad) y construir una robusta coalición de fuerzas internas y aliados externos a ese fin.

Sin unas elecciones presidenciales a la vista, celebrar “primarias” para elegir un líder podría ser una estrategia arriesgada dada la desmovilización y la desilusión del electorado. Aún así, las encuestas muestran tanto una demanda de liderazgo como una voluntad de votar, en particular si se tratara de unas elecciones primarias convocadas y supervisadas por la sociedad civil, preferentemente con acompañamiento internacional⁸². Alternativamente, los principales líderes opositores dentro del país podrían acordar de manera conjunta renunciar temporalmente a sus ambiciones presidenciales – para dar a entender que la transición implica suspender la política competitiva y se trata de un momento para la unidad, y para recobrar su propia credibilidad renunciando a las ambiciones personales – y formar un equipo de liderazgo transicional compuesto por individuos con evidente probidad y experiencia que sean capaces de inspirar confianza a nivel nacional e internacional.

Sea cual sea la forma de selección, este liderazgo tendrá que ser protegido en la medida de lo posible de la represión por parte del gobierno mediante el apoyo diplomático constante, en especial de los países latinoamericanos y europeos, y con ofertas de exilio de estos mismos Estados si las condiciones se vuelven severas. Dicho esto, sus miembros deberán estar dispuestos a arriesgarse a permanecer en el país. Un liderazgo opositor no puede llevar a cabo su tarea desde afuera.

Con la formación adecuada, es casi seguro que ese liderazgo podría mejorar la pésima tasa de aprobación de la oposición. También podría brindar a los gobiernos extranjeros y los organismos multilaterales una contraparte plausible en los esfuerzos por promover las negociaciones. A falta de un fuerte contrapeso interno al gobierno, el riesgo de que las potencias extranjeras consideren más seriamente la posibilidad de una intervención militar es mayor.

Las potencias extranjeras involucradas en Venezuela deberían por lo tanto trabajar para lograr la unidad opositora, o al menos no tomar medidas que militen contra ella, dado el papel fundamental que probablemente desempeñará en encontrar una salida a la crisis. Deberían seguir presionando al gobierno para que celebre negociaciones de buena fe, insistiendo en que se comprometa a desarrollar medidas de fomento de la confianza y una amplia agenda de negociaciones. Por ahora, el impulso de esta presión proviene de la iniciativa europea del “grupo de contacto”, que debe-

⁸² Véase la encuesta de Delphos citada anteriormente en la nota al pie 19. Casi el 90 por ciento de quienes apoyan a la MUD y el 62 por ciento de quienes apoyan la oposición que no pertenece a la MUD dijeron que participarían en unas primarias.

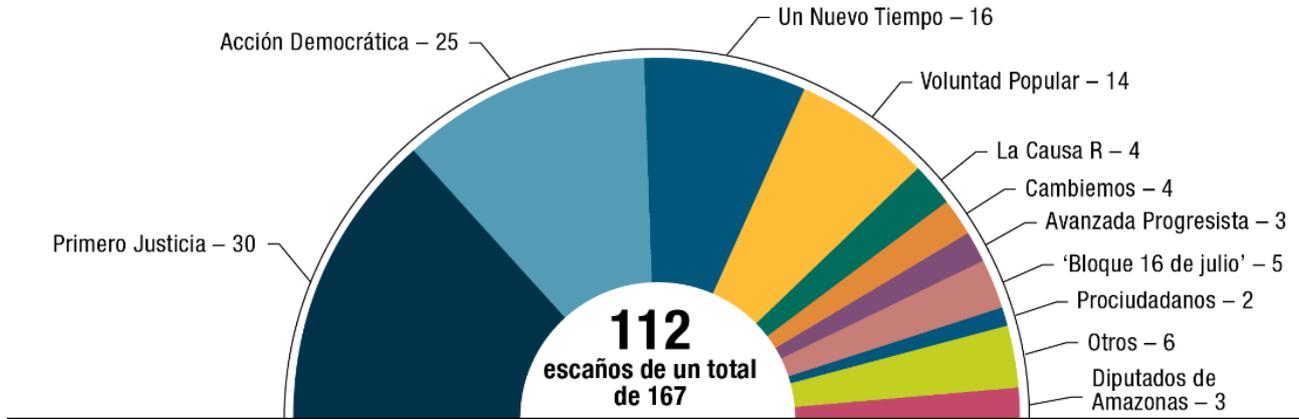
ría fortalecer el apoyo internacional hacia unas negociaciones significativas entre el gobierno venezolano y la oposición.

Al mismo tiempo, las potencias extranjeras deberían alentar a los líderes opositores dentro del país a ponerse de acuerdo sobre un nuevo liderazgo y mantener un firme apoyo por una oposición unida dedicada a una transición pacífica. Lo más importante, tal vez, es que EE.UU. ponga fin a sus declaraciones que sugieren que está considerando activamente una intervención militar. Tal intervención no solo sería desastrosa, sino que la mera sugerencia podría hacer que los líderes partidarios de la negociación abandonen su postura a favor de una línea más dura.

A pesar de que hay varias iniciativas en curso para restaurar al menos parcialmente la unidad y acordar una estrategia común con la oposición para poner fin a la crisis, es difícil ver con optimismo la posibilidad de encontrar una solución al actual caos en el corto plazo. Mientras persista, las perspectivas de resolver a la crisis serán escasas. Las potencias extranjeras y la diáspora opositora estarán tentados de buscar atajos que – en el mejor de los casos – no lograrán aliviar la situación. La presión externa es fundamental. Pero una solución duradera a la actual situación de Venezuela solo puede venir de adentro, y entre otras cosas exigirá que venezolanos con diferentes convicciones políticas acuerden los términos de la transición. El proceso comenzará cuando aquellos dentro de la oposición que aún estén comprometidos con este enfoque superen sus diferencias personales y políticas. Cuanto antes lo hagan, mejor.

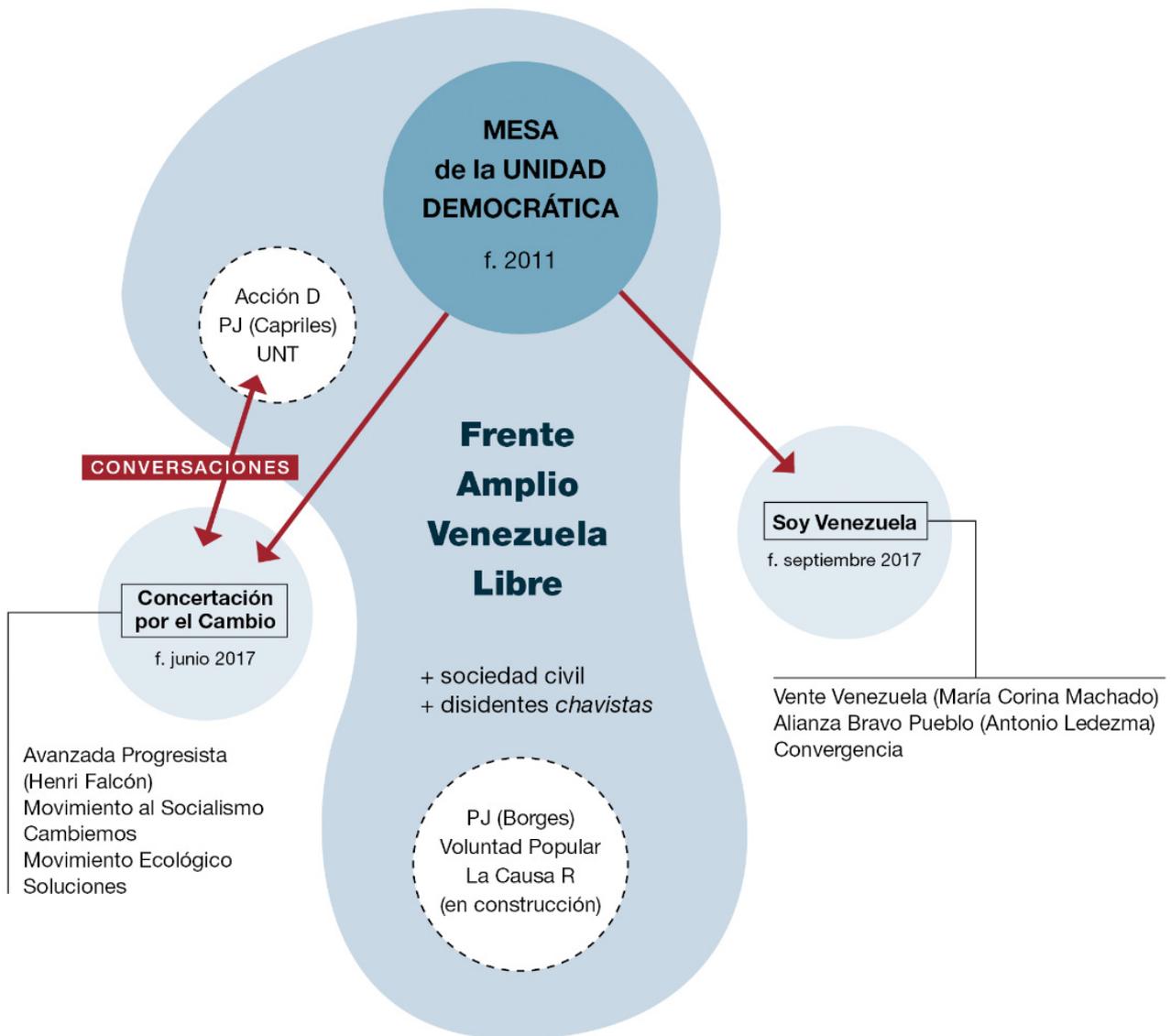
Caracas/Bogotá/Bruselas, 23 de noviembre de 2018

Anexo A: Partidos y alianzas de la oposición

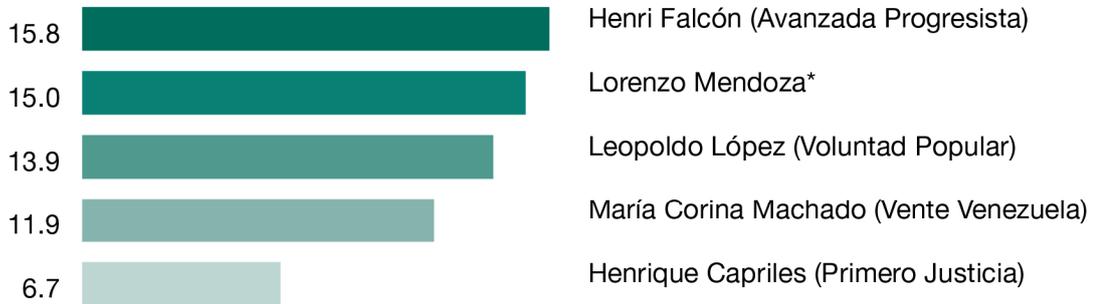


Representación por partido en la Asamblea Nacional

Diputados oficialistas no asisten



Apoyo para líderes principales



Fuente: Encuesta Delphos para el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, noviembre 2018.

* "Outsider". Dueño/presidente de Empresas Polar, la empresa privada mas grande de Venezuela. Sin ambiciones políticas conocidas.

Anexo B: Acerca de International Crisis Group

El International Crisis Group (Crisis Group) es una organización no gubernamental independiente sin ánimo de lucro, con cerca de 120 funcionarios en cinco continentes, que combina el análisis sobre el terreno con labores de sensibilización al más alto nivel, con el objetivo de prevenir y solucionar conflictos graves.

El trabajo de Crisis Group se basa en investigaciones realizadas sobre el terreno. Cuenta con equipos de analistas políticos con sede en o cerca de los países en riesgo de crisis, escalada o recurrencia de conflictos violentos. Con base en la información y las evaluaciones sobre el terreno, produce informes analíticos con recomendaciones prácticas dirigidas a quienes toman decisiones fundamentales en el ámbito internacional. Crisis Group también publica *CrisisWatch*, un boletín mensual de alerta temprana, que actualiza sucintamente y con regularidad la coyuntura en más de 70 situaciones de conflicto o conflicto potencial alrededor del mundo.

Los informes y los informes breves de Crisis Group son ampliamente distribuidos por correo electrónico y se publican simultáneamente en el sitio web de la organización, www.crisisgroup.org. Crisis Group trabaja en estrecha colaboración con gobiernos y con grupos influyentes, incluidos los medios, para llamar la atención sobre sus análisis de crisis y buscar apoyo para sus recomendaciones en material de políticas.

El Consejo de Administración de Crisis Group –cuyos miembros incluyen figuras prominentes en las esferas de la política, la diplomacia, los negocios y los medios de comunicación– participa de forma directa en la promoción de los informes y recomendaciones de la organización, buscando su consideración por parte de formuladores de políticas en el mundo. Crisis Group es dirigido por el ex Subsecretario General de las Naciones Unidas y ex Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Lord (Mark) Malloch-Brown.

El Presidente y Director Ejecutivo de Crisis Group, Robert Malley, asumió el cargo el 1 de enero de 2018. Malley fue Director del Programa de Crisis Group para Oriente Medio y Norte de África y más recientemente fue Asistente Especial del ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama al igual que Asesor Senior del Presidente para la Campaña contra ISIS, y Coordinador de la Casa Blanca para el Oriente Medio, Norte de África y la región del Golfo. Previamente, se desempeñó como Asistente Especial del presidente Bill Clinton para los asuntos Israelí-Palestinos.

La sede internacional de Crisis Group se encuentra en Bruselas, y la organización cuenta con oficinas o representación en siete localidades: Bogotá, Dakar, Estambul, Nairobi, Londres, Nueva York, y Washington, DC. También tiene representación de personal en las siguientes ciudades: Abuja, Argel, Bangkok, Beirut, Caracas, Ciudad de Gaza, Ciudad de Guatemala, Ciudad de México, Hong Kong, Jerusalén, Johannesburgo, Juba, Nueva Delhi, Rabat, Rangún, Tiflis, Toronto, Trípoli y Túnez.

Crisis Group recibe apoyo financiero de una amplia gama de gobiernos, fundaciones y fuentes privadas. En la actualidad Crisis Group tiene relaciones con los siguientes departamentos y organismos gubernamentales: Agencia Austriaca para el Desarrollo, Asuntos Globales de Canadá, Cooperación Irlandesa para el Desarrollo, Departamento Australiano para los Asuntos Internacionales y el Comercio, Dirección General de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación de la Comisión Europea, Instrumento para la Estabilidad y la Paz de la Unión Europea (IcSP), Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes, Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, Agencia Francesa para el Desarrollo, Ministerio para Europa y las Relaciones Exteriores de Francia, Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda, Ministerio de Relaciones Exteriores de Islandia, Agencia Internacional de Cooperación de Japón, Ministerio de Relaciones Exteriores de Liechtenstein, Ministerio de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda, Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia y Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Suiza.

Crisis Group también mantiene relaciones con las siguientes fundaciones: Carnegie Corporation of New York, Elders Foundation, Henry Luce Foundation, John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, Korea Foundation, Oak Foundation, Open Society Foundations, Ploughshares Fund, Robert Bosch Stiftung, Rockefeller Brothers Fund, UniKorea Foundation y Wellspring Philanthropic Fund.

Anexo C: Informes e informes breves sobre América Latina desde 2015

Informes especiales

Exploiting Disorder: al-Qaeda and the Islamic State, Informe especial N°1, 14 de marzo de 2016 (también disponible en árabe y francés).

Seizing the Moment: From Early Warning to Early Action, Informe especial N°2, 22 de junio de 2016.

Counter-terrorism Pitfalls: What the U.S. Fight against ISIS and al-Qaeda Should Avoid, Informe especial N°3, 22 de marzo de 2017.

Ciudad Juárez: ¿Transitando del abismo a la redención?, Informe sobre América Latina N°54, 25 de febrero de 2015.

En la cuerda floja: la fase final de las conversaciones de paz en Colombia, Informe breve sobre América Latina N°32, 2 de julio de 2015.

Venezuela: un desastre evitable, Informe breve sobre América Latina N°33, 30 de julio de 2015.

Justicia denegada: desaparecidos en Guerrero, México, Informe sobre América Latina N°55, 23 de octubre de 2015.

Fin de la hegemonía: ¿Qué sigue para Venezuela?, Informe breve sobre América Latina N°34, 21 de diciembre de 2015.

¿De bastón a catalizador?: la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Informe sobre América Latina N° 56, 29 de enero de 2016.

Venezuela: al borde del precipicio, Informe breve sobre América Latina N°35, 23 de junio de 2016.

Presa fácil: violencia criminal y migración en Centroamérica, Informe de Crisis Group sobre América Latina N°57, 28 de julio de 2016.

Últimos pasos hacia el fin de la guerra en Colombia, Informe sobre América Latina N°58, 7 de septiembre de 2016.

Venezuela: diálogo a duras penas, Informe sobre América Latina N°59, 16 de diciembre de 2016.

Bajo la sombra del "no": la paz en Colombia después del plebiscito, Informe sobre América Latina N°60, 31 de enero de 2017.

Veracruz: reparar el estado de terror de México, Informe sobre América Latina N°61, 28 de febrero de 2017.

El salario del miedo: maras, violencia y extorsiones en América Central, Informe sobre América Latina N°62, 6 de abril de 2017.

Poder sin el pueblo: evitando el colapso de Venezuela, Informe breve sobre América Latina N°36, 19 de junio de 2017.

Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz, Informe sobre América Latina N°63, 19 de octubre de 2017.

Venezuela: la deuda del hambre, Informe breve sobre América Latina N°37, 23 de noviembre de 2017.

Política y violencia perpetua en El Salvador, Informe sobre América Latina N°64, 19 de diciembre 2017.

Cómo detener la onda expansiva de la crisis en Venezuela, Informe sobre América Latina N°65, 21 de marzo de 2018.

La frontera sur de México: seguridad, violencia y migración en la era Trump, Informe sobre América Latina N°66, 9 de mayo de 2018.

Reformas arriesgadas: el enfoque del gobierno de Duque hacia la paz en Colombia, Informe de Crisis Group sobre América Latina N°67, 21 de junio de 2018.

La paz que falta: el nuevo gobierno de Colombia y la última de sus guerrillas, Informe de Crisis Group sobre América Latina N° 68, 12 de julio de 2018.

Construcción de paz en México: los dilemas de seguridad que enfrenta el gobierno de López Obrador, Informe sobre América Latina N°69, 11 de octubre de 2018.

Rescatando la lucha de Guatemala contra el crimen y la impunidad, Informe de Crisis Group sobre América Latina N°70, 24 de octubre de 2018

Anexo D: Consejo de Administración de International Crisis Group

PRESIDENTE DEL CONSEJO**Lord (Mark) Malloch-Brown**

Ex Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO**Robert Malley**

Ex Coordinador de la Casa Blanca para el Medio oriente, Norte de África y la región del Golfo

OTROS MIEMBROS DEL CONSEJO**Fola Adeola**

Fundador y presidente, FATE Foundation

Hushang Ansary

Presidente, Parman Capital Group LLC; Ex Embajador de Irán en EE.UU. y Ministro de Finanzas y Asuntos Económicos

Carl Bildt

Ex Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Suecia

Emma Bonino

Ex Ministra de Relaciones Exteriores de Italia; Ex Comisionada Europea para la Ayuda Humanitaria

Cheryl Carolus

Ex Alta Comisionada de Sudáfrica ante el Reino Unido; ex Secretaria General del Congreso Nacional Africano (ANC)

Maria Livanos Cattau

Ex Secretaria General de la Cámara Internacional de Comercio

Nathalie Delapalme

Directora ejecutiva y miembro de la Junta Directiva de Mo Ibrahim Foundation

Alexander Downer

Ex ministro de Asuntos Exteriores y Alto Comisionado ante el Reino Unido de Australia

Sigmar Gabriel

Ex ministro de Asuntos Exteriores y Vice Canciller de Alemania

Robert Fadel

Ex miembro del Parlamento de Líbano; Presidente y Director Ejecutivo de ABC Group

Frank Giustra

Presidente y Director Ejecutivo, Fiore Financial Corporation

Hu Shuli

Editor en jefe de Caixin Media; Profesor en Sun Yat-sen University

Mo Ibrahim

Fundador y Presidente de Mo Ibrahim Foundation; fundador de Celtel International

Ellen Johnson Sirleaf

Ex presidente de Liberia

Yoriko Kawaguchi

Ex Canciller de Japón; Ex ministro de Medio Ambiente

Wadah Khanfar

Cofundador, Al Sharq Forum; ex Director General, Al Jazeera Network

Nasser al-Kidwa

Presidente de Yasser Arafat Foundation; Ex Mediador Adjunto de la ONU sobre Siria

Bert Koenders

Ex Ministro de Relaciones Exteriores de Holanda y Subsecretario General de Naciones Unidas

Andrey Kortunov

Director General del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales

Ivan Krastev

Presidente del Centro para Estrategias Liberales (Sofia); miembro fundador de la junta del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores

Ramtame Lamamra

Ex ministro de Asuntos Exteriores de Argelia; Ex Comisionado de Paz y Seguridad, Unión Africana

Tzipi Livni

Ex Canciller y Vice Primer Ministro de Israel

Helge Lund

Ex director ejecutivo de BG Group Limited (GB) y Statoil (Noruega)

William H. McRaven

Almirante retira de la Marina de EE.UU., que sirve como 9º comandante del Comando e Operaciones Especiales de EE.UU.

Shivshankar Menon

Ex Secretario de Exteriores de India; Ex Asesor Nacional de Seguridad

Naz Modirzadeh

Director del programa de Derecho Internacional y Conflicto Armado de la Escuela de Derecho de Harvard

Saad Mohseni

Presidente y Director Ejecutivo de MOBY Group

Marty Natalegawa

Ex Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia; Representante permanente ante la ONU; Ex embajador en Reino Unido

Ayo Obe

Presidente de la junta de Gorée Institute (Senegal); abogada (Nigeria)

Thomas R. Pickering

Ex Embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Rusia, India, Israel, Jordania, El Salvador y Nigeria

Ahmed Rashid

Escritor y periodista de política exterior, Pakistan

Juan Manuel Santos Calderón

Ex Presidente de Colombia, Premio Nobel de Paz 2016

Wendy Sherman

Ex Subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de EE.UU. y Jefe negociador para el Acuerdo Nuclear con Irán I

Alexander Soros

Fundador, Fundación Alexander Soros

George Soros

Fundador, Open Society Foundations y Presidente, Soros Fund Management

Pär Stenbäck

Ex Ministro de Relaciones Exteriores y de Educación, Finlandia. Presidente del Parlamento Cultural Europeo

Jonas Gahr Støre

Líder del Partido Noruego de los Trabajadores, Ex Ministro de Relaciones Exteriores de Noruega

Jake Sullivan

Ex director de Planificación de políticas en el Departamento de Estado de EE. UU., Asistente adjunto del presidente Obama y asesor de seguridad nacional del vicepresidente Biden

Lawrence H. Summers

Ex Director del Consejo Económico Nacional de los EE.UU. y ex Secretario del Tesoro de EEUU; Presidente emérito de la Universidad de Harvard

Helle Thorning-Schmidt

Director Ejecutivo de Save the Children International; Ex Primer Ministro de Dinamarca

Wang Jisi

Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de China; Presidente, Instituto de Estudios Internacionales y Estratégicos, Peking University

CONSEJO DEL PRESIDENTE

Es un distinguido grupo de donantes particulares y corporativos que brindan apoyo esencial y experticia a Crisis Group.

CORPORATIVO

BP
Shearman & Sterling LLP
Statoil (U.K.) Ltd.
White & Case LLP

INDIVIDUAL

(5) Anónimos
Scott Bessent
David Brown & Erika Franke
Herman De Bode

Stephen Robert
Ludék Sekyra
Alexander Soros
Ian R. Taylor

CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL

Donantes particulares y corporativos que juegan un papel central en los esfuerzos de Crisis Group para prevenir conflictos graves.

CORPORATIVO

Anónimo
APCO Worldwide Inc.
Atlas Copco AB
Chevron
Edelman UK
Eni
HSBC Holdings Plc
MetLife
Noble Energy
RBC Capital Markets
Shell

INDIVIDUAL

(3) Anónimos
Mark Bergman
Stanley Bergman & Edward Bergman
David & Katherine Bradley
Eric Christiansen
Sam Englehardt
The Edelman Family Foundation
Seth & Jane Ginns
Ronald Glickman
David Harding
Geoffrey R. Hogue & Ana Luisa Ponti
Geoffrey Hsu
David Jannetti

Faisal Khan
Cleopatra Kitt
Michael & Jackie Lambert
Samantha Lasry
Leslie Lishon
Malcolm Hewitt Wiener Foundation
The New York Community Trust – Lise Strickler & Mark Gallogly Charitable Fund
The Nommontu Foundation
Brian Paes-Braga
Kerry Propper
Duco Sickinghe
Nina K. Solarz
Clayton E. Swisher
Enzo Viscusi

CONSEJO EMBAJADOR

Jóvenes talentos de diversos campos que contribuyen con sus habilidades y experticia para apoyar la misión de Crisis Group

Amy Benziger
Tripp Callan
Kivanc Cubukcu
Matthew Devlin
Victoria Ergolavou
Noa Gafni
Christina Bache
Lynda Hammes
Jason Hesse
Dalí ten Hove

Lindsay Iversen
Azim Jamal
Arohi Jain
Christopher Louney
Matthew Magenheim
Madison Malloch-Brown
Megan McGill
Hamesh Mehta
Tara Opalinski
Perfecto Sanchez

Nidhi Sinha
Chloe Squires
Leeanne Su
Bobbi Thomason
AJ Twombly
Dillon Twombly
Annie Verderosa
Zachary Watling
Grant Webster

ASESORES SENIOR

Antiguos miembros del Consejo de Administración que mantienen una relación con Crisis Group y a quienes se recurre ocasionalmente en busca de apoyo y asesoría (en la medida en que sean consistentes con cualquier otro cargo que puedan estar desempeñando en ese momento).

Martti Ahtisaari
Presidente Emérito
George Mitchell
Presidente Emérito
Gareth Evans
Presidente Emérito
Kenneth Adelman
Adnan Abu-Odeh
HRH Prince Turki al-Faisal
Celso Amorim
Óscar Arias
Richard Armitage
Diego Arria
Zainab Bangura
Nahum Barnea
Kim Beazley
Shlomo Ben-Ami
Christoph Bertram

Lakhdar Brahimi
Kim Campbell
Jorge Castañeda
Joaquim Alberto Chissano
Victor Chu
Mong Joon Chung
Sheila Coronel
Pat Cox
Gianfranco Dell'Alba
Jacques Delors
Alain Destexhe
Mou-Shih Ding
Uffe Ellemann-Jensen
Stanley Fischer
Carla Hills
Swanee Hunt
Wolfgang Ischinger
Aleksander Kwasniewski
Ricardo Lagos

Joanne Leedom-Ackerman
Todung Mulya Lubis
Graça Machel
Jessica T. Mathews
Miklós Németh
Christine Ockrent
Timothy Ong
Roza Otunbayeva
Olara Otunnu
Lord (Christopher) Patten
Surin Pitsuwan
Fidel V. Ramos
Olympia Snowe
Javier Solana